

Bogotá, D.C., diciembre 14 de 2016

Doctora

MARCELA AMAYA GARCÍA

Gobernadora Departamento del Meta

Villavicencio-Meta

**Asunto: Informe de Riesgo N°042-16A.I., de Inminencia<sup>1</sup>; para los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, La Macarena, Uribe (Meta), en favor la población civil y, particularmente, de los defensores y defensoras de derechos humanos y presidentes de Juntas de Acción Comunal de las siguientes zonas:**

Municipio o Distrito	Cabecera	Inspección/Corregimiento	Vereda
Vistahermosa	Cabecera	La Cooperativa, Santo Domingo, Piñal.	La Cooperativa, Piñal, Guaimaral, El Tigre, Canoas, La Gorgona, La Esmeralda, Puerto Abel, La Bocana, Caño Amarillo, El Laurel, El Palmar, Alto Canagüey, Puerto Lucas, Santo Domingo, Costa Rica, Albania, Mata Bambú.
Puerto Rico	Cabecera	Puerto Toledo	Santa Lucía, Fundadores, Charco Danto, San Pedro, Colinas, El Jordán, La Primavera, Caño Blanco, Caño Alfa, Fundadores Bajo, Palmeras, Comuneros, Puerto Toledo, Puerto Chispas, Barranco Colorado, La Ermita, Puerto Esperanza, Brisas del Cafre, Monserrate, Miravalles, La Rivera Palmar, El Danubio
Puerto Lleras	Cabecera	Villa la Paz	Brisas del Güejar, El Darién, La Argentina, Puerto Príncipe, El Diamante, Caño Rayado, Alto Cunumia, Charco Trece, Villa La Paz, La Unión, Casibare, Canada
Lejanías	Cabecera		Guarumal
La Macarena	Cabecera	San Juan de Lozada	Puerto Lozada, El Quebradon, La Reforma y Pocetas, San Francisco de La Sombra, Aires del Meta, Aires del Perdido, Palomas, Caserio San Juan de Lozada, Samaria, Villarrica, Delicias, la unión ,Platanillo.
Uribe		Inspección de La Julia	Camelias, Centro Duda, Comuneros, El Diamante, El Diviso, El Edén, El Mirador, El Placer, El Progreso, El Recreo, El Salitre, El Tigre, El Triunfo, El Vergel, Espelda, Explanación, La Estrella, La Amistad, La Esperanza, La Floresta, La Libertad, La Pista, La Siria, La Sonora, La Unión, La Argelia, La Belleza, La Paz, Las Rosas, Los Planes, Los Tambos, Los Tempranos, Montealegre, Nueva Espelda, Palestina, Palmar Alto, Palmar Bajo, Papaneme, Primavera, Puerto Crevaux, San Carlos, Santander, Tierradentro, Versalles y Yavia, así como las veredas Planes , Paraíso, Gaviotas, La Chamuza y Candilejas, habitadas por comunidades de Los pueblos Guambiano, Embera Katio y Paez.

Respetada señora Directora:

De manera atenta remito a Usted, el informe de riesgo de la referencia, en el que se describe el escenario de riesgo para la población civil de los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, La Macarena y Uribe en el departamento del Meta.

<sup>1</sup> Los informes de riesgo de inminencia se emiten por la gravedad y la alta probabilidad de concreción de riesgo con el objeto que las autoridades adopten las medidas requeridas y ajustadas a la calidad de riesgo identificado. El informe de inminencia se tramita de manera excepcional y su emisión debe obedecer a los parámetros y criterios establecidos por el sistema. El texto de este informe es abreviado y en él se evalúan las circunstancias de tiempo, modo y lugar las dinámicas de los actores: las características de la comunidad los indicios y hechos generados del riesgo, señalando las recomendaciones según el mandato y la competencia de la autoridad concernida. Por tratarse de amenazas con alta probabilidad de ocurrencia y que requieren una atención prioritaria. Su destinatario son las autoridades pertenecientes a la fuerza pública y las autoridades civiles de la región o localidad (Defensoría del Pueblo. Revista Población Civil. No. 4 pag. 31, febrero de 2006).

El escenario de riesgo está determinado por la presencia de la guerrilla de las FARC Bloque Oriental “Jorge Briceño” en proceso de desmovilización, y por las posibles y eventuales disidencias según lo informó un comunicado de las FARC divulgado el 13 de diciembre de 2016.

De igual manera, son fuente del riesgo de vulneraciones de los derechos humanos los presuntos integrantes de grupos armados posdesmovilización de las AUC, que se autodenominan Bloque Meta y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC- o “Clan Golfo”), que en alianza con el Bloque Meta, buscan ingresar a la región del Ariari Alto y bajo, conforme se informó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, el pasado 01 de Diciembre de 2016.

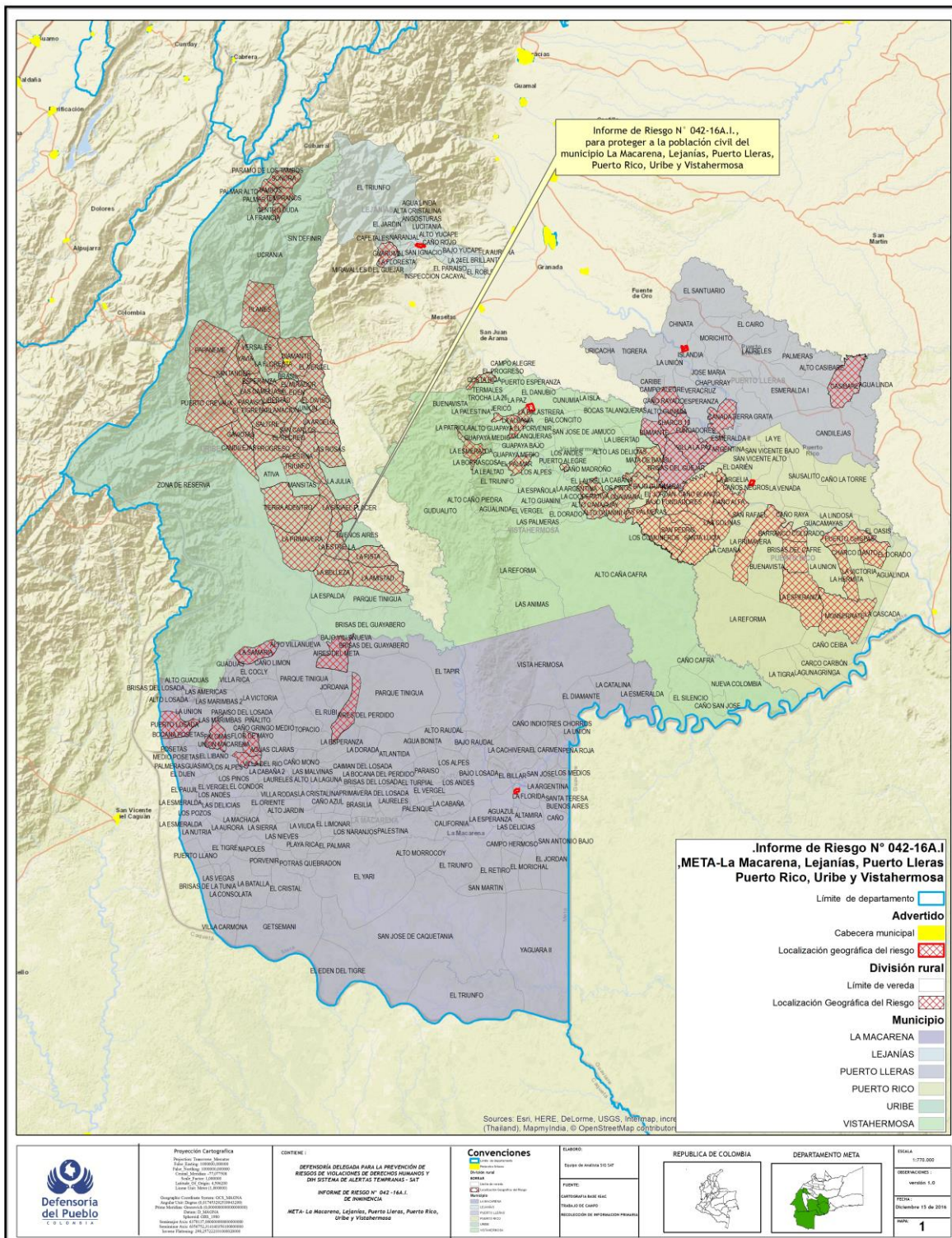
### **Antecedentes**

El pasado 24 de noviembre del año 2015, el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo 023-15 para los municipios de Vistahermosa Puerto Rico y Puerto Lleras. Se estableció que el escenario de riesgo en los municipios Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras (la subregión), estaba determinado por la presencia de la guerrilla de las FARC-EP Frentes 22, 27, 43, Camilo Torres, Manuela Beltrán y Vladimir Steven, así como por la Compañía Judith Rondón y la Columna Isaías Pardo y de otra parte, por los grupos armados posdesmovilización de las AUC, Bloque Meta y Libertadores del Vichada.

Según la referida advertencia, la actividad de estas agrupaciones armadas ilegales configurarían riesgos para la población civil derivados en amenazas, homicidios en persona protegida, desplazamientos forzados, reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, restricciones a la movilidad, accidentes e incidentes por minas antipersonal y restos explosivos de guerra (REG), confinamientos, afectaciones a la autonomía personal, extorsiones y violaciones al derecho a permanecer al territorio. Siendo los niños niñas adolescentes y jóvenes, campesinos, docentes comerciantes, docentes, contratistas y empresarios los sectores poblacionales más expuestos.

El 9 de Junio de 2016, el SAT de la Defensoría del Pueblo mediante comunicación escrita, entre otras informaciones, señaló que según fuentes comunitarias, desde la semana del 24 al 28 de mayo aparecieron imágenes y mensajes de las AUC, en la vía que conduce a las veredas de Puerto Lozada, El Quebradon, La Reforma y Pocetas, en el municipio de La Macarena.

El 1 de julio de 2016, La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-, denunció ante la comunidad la desaparición en Vistahermosa, vereda Alto Guayapa, del dirigente y defensor de Derechos Humanos Ángel María Muñoz quien fue visto por última vez por su comunidad el 1 de Julio de 2016; el dirigente salió de su casa presuntamente para asistir a una reunión en calidad de líder comunitario. En la actualidad no se conoce su paradero.





El 6 de Julio de 2016, la Defensoría del Pueblo comunicó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, presuntos actos de hostigamientos en horas de la madrugada del 14 de junio de 2016 en la finca Buena Vista Baja vereda Centro Duda, y de la existencia de un supuesto panfleto con un listado de integrantes de la comunidad en el cual se les señala de ser presuntos integrantes del Frente 53 de la Guerrilla. (Oficio SAT 404002-0841-16).

El día 16 de julio de 2016, según fuentes comunitarias, hacia las 10 am y por el lapso de una hora, se escucharon explosiones en las inmediaciones de Puerto Rico, por la vía que conduce hacia Toledo. Desde este día, 16 de julio, hasta el 18 de julio la comunidad reportó enfrentamientos entre la guerrilla y grupos ilegales. El 19 de julio, la comunidad informó de nuevo “bombazos”, esta vez cerca de la vereda El Danubio. Durante esta misma semana, pobladores registraron el ingreso a la zona de camionetas con vidrios polarizados y que los ocupantes no eran de la región por su aspecto y acento.

El 23 de agosto de 2016, en La Macarena, la dirigente Social Nancy Lamus fue amenazada vía telefónica por presuntos integrantes de las AUC. Nancy Lamus es parte del proceso MUCAPOC, iniciativa caracterizada como una mesa de coordinación, promoción y divulgación política y social de los derechos humanos, que recoge iniciativas sociales urbanas y rurales en el oriente colombiano: Arauca, Boyacá, Bogotá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada. Su objetivo, es “mantener un espacio de acción permanente, mediante el cual las organizaciones campesinas y populares que la integran, promueven acciones para lograr cambios en el ámbito político, económico, social, ambiental y cultural”.

El 6 de octubre de 2016, el Sistema de Alertas Temprana de la Defensoría del Pueblo informó a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas la reaparición de letreros alusivos a las AUC en la vereda San Francisco de la Sombra, del Municipio La Macarena, departamento del Meta. (Oficio SAT 404001-1752-16)

El 20 de Noviembre de 2016, después del homicidio del señor Erley Monroy, la señora Nancy Lamus, fue víctima de hostigamientos y persecuciones: Cuatro hombres desconocidos presuntamente armados, según versiones, fueron a buscarla a su sitio de habitación en la vereda Villarrica; al no encontrarla la indagaron en la Vereda Samaria. En estas dos veredas desarrollan actividades la Organización ASCAL-G. Producto de estas amenazas y hostigamientos la líder social, ante el temor de correr la misma suerte del Señor Erley Monroy, se desplazó forzosamente. Los hostigamientos continúan, incluso en contra de su núcleo familiar.

El 24 de noviembre 2016, el SAT emitió el Informe de Riesgo N° 038-16, de Inminencia, para el municipio San Vicente del Caguan (Caquetá), particularmente, las veredas La Siberia, Minas Blancas; Las Morras, Miravalle, Guayabal, Balsillas que hacen parte de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Pato - Balsillas; Puerto Losada, La Unión, Platanillo, San Juan de Losada, La Sombra, Los Pozos, Las Damas y las Delicias ubicadas en la zona compartida entre los departamentos de Caquetá y Meta y los barrios Villa Ferro, Centro, Santa Isabel, Las Palmeras y La Consolata en razón a los señalamientos, las amenazas,

intimidaciones, atentados y ataques contra la vida e integridad de las personas, líderes y líderes sociales y defensores/as de derechos humanos que son estigmatizados o señalados de ser presuntos “auxiliadores y/o colaboradores” de la guerrilla de las FARC.

El 25 de noviembre de 2016. En Vistahermosa, vereda la Reforma, Sector Tres Cruces, apareció el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Freddy Agudelo Quintero, el cual registraba varios impactos de bala. La zona rural del municipio de Vista Hermosa fue el escenario donde se perpetró este hecho de violencia, del cual fue víctima el hombre de 27 años. La comunidad se encuentra consternada ante el macabro crimen que se registró en horas de la tarde del 15 de noviembre. Se desconoce el presunto responsable.

El 28 de noviembre de 2016 en La Macarena, Meta. El Personero Municipal reportó amenazas en contra de integrantes de la Asociación Campesina del Lozada Guayabero ASCAL-G, de las veredas Aires del Meta, Aires del Perdido, Palomas, Caserío San Juan de Lozada. Para esa misma oportunidad, Rocío Serrato Yara quien vive en San Juan de Lozada y es Concejala del Municipio de La Macarena Meta, informó que teme igualmente por su vida pese a que no ha recibido amenazas.

El 1 de Diciembre de 2016, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, conoció un panfleto amenazante mediante el cual las presuntas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, anuncian a la comunidad ariarenses el comienzo de la mal llamada “limpieza social” en los municipios de la región a partir de 01 de diciembre de 2016.

### **Situación Actual**

La situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) para defensores y defensoras de derechos humanos en el territorio señalado en riesgo, está determinada por la presencia de grupos armados ilegales pos desmovilización de las AUC, que se autodenominan Bloque Meta y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, -AGC- o Clan Golfo, quienes ejecutan una serie de acciones violentas selectivas e indiscriminadas representadas en el uso de métodos y medios para generar terror por medio de homicidios en persona protegida, desaparición forzada, amenazas de muerte, intimidación a través de correos electrónicos, panfletos, seguimiento y hostigamiento a líderes, líderes sociales y en general a personas vinculadas a organizaciones sociales, de derechos humanos, Juntas de Acción Comunal, afectando particularmente a las organizaciones sociales en las que tiene incidencia la Marcha Patriótica y el proceso MUCAPOC.

La dinámica de las agrupaciones armadas ilegales, además de privilegiar el cultivo y el tráfico de estupefacientes, consiste en evitar la existencia de una base social conformada por campesinos pobres, víctimas, obreros y sindicalistas, que se oponga - entre otros- a la acelerada concentración de la propiedad latifundista, al monocultivo y a megaproyectos minero-energéticos-agroindustriales, que eventualmente afectan

derechos económicos sociales y culturales y derechos colectivos como los del medio ambiente.

A comienzos del año 2016 y con la consolidación del proceso de paz, las FARC empezaron a retirarse de algunas zonas y a dejar de ejercer control territorial, pero aumentaron las acciones políticas de formación con miras a constituir una base social. Esta situación redujo sustancialmente el número de hostigamientos y atentados contra la Fuerza Pública y los ataques contra la infraestructura. Sin embargo, sectores comunitarios han expresado el temor por la persistencia de las extorsiones, el tráfico de estupefacientes y la continuidad de la política antidrogas sin que hayan respuestas para la sustitución de cultivos de uso ilícito y la existencia de conflictos intracomunitarios por la débil presencia del Estado para hacer cumplir las disposiciones comunitarias que se venían estableciendo históricamente en estas zonas para regular la vida en comunidad, vacío que al parecer, pretenden llenar otras manifestaciones de violencia.

Con respecto a los grupos armados organizados, estos se han venido transformando y reconfigurando en el periodo 2015-2016: hay más presencia hombre-arma, con eventuales ingresos a territorios despejados por las FARC en proceso de desmovilización, y por otro, en el cambio de nombre pues durante el presente año empezaron a presentarse como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños. Esta agrupación continua igualmente ligada a acciones delictuales como la extorsión, el hurto y el tráfico de coca.

Es evidente que en el tránsito hacia las zonas de pre agrupamiento y el inicio del proceso de desmovilización de las FARC, otros grupos armados ilegales estén interesados en ingresar a las zonas que antes controlaba las FARC-EP y que en ese proceso podrían cometer presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Las comunidades informaron que el pasado 13 de diciembre, un grupo ilegal interfirió una reunión de campesinos en el municipio de Puerto Rico.

Un aspecto adicional y que complejiza la situación, es el comunicado público de las FARC del 13 de diciembre de 2016, mediante el cual le informa a la opinión pública la decisión de excluir de sus filas a Gentil Duarte, Euclides Mora, John Cuarenta, Giovanni Chuspas y Julián Chollo, reconocidos comandantes de estructuras de Frente en Guaviare y Meta motivada -según su escrito- “en su conducta reciente que los ha llevado a entrar en contradicción con nuestra línea político-militar”. ( <http://www.FARC-ep.co/comunicado/FARC-ep-separa-a-5-mandos-de-sus-filas.html> )

La circunstancia descrita establece la posibilidad de potenciales enfrentamientos entre estructuras de las FARC. Es factible que se presenten purgas que podrían afectar los derechos fundamentales a la vida, integridad y libertad personal de la población civil y resurjan los llamados “juicios revolucionarios”. Existe preocupación por la posibilidad de que las disidencias actúen en contra de quienes se constituyan o puedan ser considerados como “leales al secretariado de las Farc” adentro y afuera de la organización, quienes pueden ser señalados como “objetivo militar” o blanco de ataque o representen un peligro para su seguridad, circunstancia que puede ser aprovechada

por los grupos armados tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ha demostrado su interés de copar los vacíos territoriales de las desmovilizadas FARC.

Así las cosas, una de las manifestaciones más preocupantes de la situación de riesgo descrita, son las amenazas, intimidaciones y ataques contra la población civil que suele ser señalada de “base social del enemigo”. El fin de los grupos armados es someter a la población a partir de la intimidación y la eliminación de expresiones ciudadanas que de una u otra forma se antepongan a los intereses de los actores armados en esta difusa situación, que puede generar un nuevo proceso de reconfiguración social territorial (desplazamientos forzados), con el propósito de garantizar que la población que habita en el territorio no sea un obstáculo para la existencia en condiciones de seguridad para las organizaciones armadas ilegales en expansión como las AGC o en proceso de configuración embrionaria de estructuras como ocurre con las presuntas disidencias de las FARC-EP

La existencia de presuntas disidencias de las FARC y la necesidad de permanecer en condiciones seguras en el territorio, deriva en el uso en común de la violencia indiscriminada que se caracteriza por la utilización de métodos y medios para generar terror en los líderes y lideresas sociales con el objeto de obtener la lealtad por la fuerza de las armas. Violencia que está representada en atentados contra vida e integridad personal, libertad de información, de movilización de circulación y de residencia.

Por otro lado, los grupos armados ilegales, en proceso de reconfiguración y reunificación, con miras a ocupar, reemplazar y disputar, -eventualmente- los espacios que se deriven de la desmovilización de las FARC con los intereses arriba descritos, también son actores armados fuentes de riesgo de violaciones de los derechos humanos.

Es importante mencionar que el presente informe de riesgo de inminencia es complementario y no subsume lo establecido por el Informe de Riesgo 023-15 A.I para los municipios de Vistahermosa Puerto Rico y Puerto Lleras, emitido el pasado 24 de Noviembre del año 2015, por el SAT de la Defensoría del Pueblo y declarado alerta temprana por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, el pasado 03 de diciembre de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a las autoridades civiles y a la Fuerza Pública del departamento del Meta y de los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa, Lejanías, La Macarena y Uribe, como las competentes en el nivel nacional, evaluar la presente información y adoptar las siguientes recomendaciones con carácter urgente:

1. A la Gobernación del Meta, Alcaldías de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección implementar las medidas de protección individual y colectiva para garantizar la vida, libertad e integridad de la población civil, el derecho a la circulación, el derecho a defender los derechos y a permanecer en el territorio, de manera especial de los representantes y miembros

de las organizaciones defensoras de derechos humanos que desarrollan actividades en los municipios focalizados en riesgo.

2. A la Unidad Nacional de Protección (UNP) en coordinación con el departamento del Meta y las alcaldías Municipales y organizaciones no gubernamentales que tienen incidencia en el territorio (entre otras MUCAPOC), para que realicen el correspondiente censo de defensores y defensoras en el territorio señalado en riesgo, y se realicen los estudios de riesgo a los líderes de las organizaciones sociales que hacen presencia en las zonas focalizadas en el presente informe de riesgo.
3. A la Gobernación del Meta, convocar a una reunión extraordinaria del Subcomité de Prevención y Protección del Comité Departamental de Justicia Transicional, ampliado con líderes y lideresas del Departamento del Meta, a fin de que se tomen medidas efectivas concertados para salvaguardar la vida e integridad de los líderes sociales de las organizaciones del territorio focalizado como a brindar garantías para el ejercicio de sus actividades, entre ellas la de la protesta y la oposición política.
4. A la Gobernación del Meta, a las Alcaldías Municipales de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, La Macarena, Uribe, como responsables del orden público coordinar con la Fuerza Pública el reforzamiento de los dispositivos de seguridad, capacidad operacional que conduzcan a la efectiva y real neutralización de los grupos armados ilegales y persecución de las diferentes modalidades de violencia.
5. Al Ministerio de la Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, reforzar los dispositivos de seguridad y capacidad operacional seguridad y de inteligencia que conduzcan a la efectiva y real neutralización de los grupos armados ilegales y persecución de las diferentes modalidades de violencia, garantizando en todas las operaciones la aplicación de protocolos -sin exclusión- orientados a respetar los derechos humanos de la población civil y las reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario.
6. A la Policía Nacional, fortalecer su capacidad técnica y operativa a efecto de que pueda desarrollar las labores de inteligencia, investigación y persecución de las modalidades de violencia descritas en el presente informe, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la población civil.
7. A la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, apoyar la coordinación de la respuesta estatal en materia de prevención y protección por parte de las autoridades concernidas en el presente informe de riesgo de inminencia.



8. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, informar de manera periódica a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo previsto en la Corte Constitucional y la Ley 24 de 1992. Dicha información deberá ser allegada dentro de los cinco días siguientes al recibo del presente según lo estipulado en el artículo 15 y subsiguientes de la Ley 24 del 15 de diciembre de 1992 a los siguientes datos de contacto:

- Correo electrónico institucional: [jeguzman@defensoria.gov.co](mailto:jeguzman@defensoria.gov.co) y [fegaitan@defensoria.gov.co](mailto:fegaitan@defensoria.gov.co)
- Dirección postal: carrera 9 16-21 Bogotá D.C., código postal: 110321 Defensoría del Pueblo

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN  
Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de  
Violaciones de Derechos Humanos y DIH  
Sistema de Alertas Tempranas - SAT

Proyectó:

Revisó: Jorge Enrique Calero Chacón

Archivado en: D:/SAT/IR\_NS/2016/IR N° 042-16 MET-

Consecutivo Dependencia: 404001/2044-16